

La condena a Fujimori y la democracia

Nicolás Lynch

Las diferentes reacciones a la condena de Fujimori nos dan una idea del tamaño de la democracia para los diferentes grupos políticos y de opinión que proyecta, asimismo, la imagen que tienen del país y su futuro.

Para los fujimoristas y buena parte de la derecha peruana, a la cual, por su mutismo sobre el tema parece unirse el gobierno de Alan García, el rechazo a la condena los reafirma en la necesidad de una “democracia de baja intensidad” que se debe limitar a elegir gobiernos que pueda controlar, subordinando a su antojo a los poderes legislativo y judicial. La democracia en esta visión no es otra cosa que una forma de administrar intereses y privilegios. La muestra de independencia que ha dado el Poder Judicial con esta condena es algo que se debe revertir de inmediato para regresar a la época de los jueces domesticados al servicio del poder.

Para muchos líderes de opinión y algunos políticos de centro y derecha en la versión del antiguo Perú 21, la condena refleja una saludable independencia del Poder judicial que sanciona crímenes abominables cometidos durante un gobierno autoritario que de ninguna manera deben repetirse. Para ellos, la democracia no es sólo gobiernos elegidos sino también un Estado de Derecho que debe garantizar la vida y la propiedad de las personas. Los déficits de nuestra democracia deben, en esta visión, enfrentarse ampliando el imperio de la ley y la independencia de los poderes.

Para sectores de izquierda, por otra parte, la condena no solo es una muestra de independencia del Poder Judicial a saludar sino también, por extensión, la condena a una dictadura que, en su momento, terminó con el Estado de Derecho e impuso un programa económico que reconcentró la propiedad y los ingresos en contra de la mayoría nacional. En este sentido, es un desafío también a los gobiernos elegidos que ya en democracia han continuado económica y políticamente con el fujimorismo. En esta concepción, nuestra precaria democracia debe ampliarse para incluir no solo gobiernos elegidos e imperio de la ley sino también derechos sociales que apunten al bienestar de la población y ataquen así las razones de fondo de estos abusos.

Hasta ahora el fujimorismo ha sido el que mejor a salido a vender su versión. El gobierno de los ricos con el apoyo de los pobres parecería encontrar en ellos y sus operadores mafiosos la continuidad en el 2011. Esta arremetida es imposible de enfrentar solo con los argumentos de la ley. Hay también que levantar una propuesta económica y política alternativa que señale un camino distinto al del continuismo de los últimos casi veinte años, para que la gente crea y apueste por un país diferente. Otra cosa es apostar a la derrota.